



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)**

Demandante: CARMEN ROCÍO RUÍZ QUINTERO  
Demandado: SERVINCLUIDOS LTDA  
Radicado: 05001 31 05 012 2018 00188 01  
Sentencia: S-009

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín el día 16 de febrero de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES:**

CARMEN ROCÍO RUÍZ QUINTERO demandó a la sociedad SERVINCLUIDOS LTDA, para que una vez se declare i) la existencia de un contrato de trabajo desde el 1 de septiembre de 1995 hasta el 17 de noviembre de 2017, ii) que el procedimiento de descargos y sanciones y despido por supuesta justa causa realizado por la entidad demandada fue ineficaz y/o nulo y iii) que la terminación del contrato

fue sin justa causa legal, se CONDENE a la sociedad demandada al reintegro bajo las mismas condiciones que desempeñaba en la compañía, junto con el pago de salario, prestaciones sociales, vacaciones, aportes al sistema de seguridad social. Igualmente solicita el reajuste de los salarios y las prestaciones sociales, el pago de sanciones moratorias por el pago deficitario de los salarios y prestaciones sociales y cesantías, el pago del reajuste en las cotizaciones en pensiones, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

De manera SUBSIDIARIA al reintegro, pretende la indemnización por despido injusto.

### **LOS HECHOS:**

Expone como fundamento de sus peticiones, que el 1 de septiembre de 1995 celebró contrato de trabajo a término indefinido con HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A en el cargo de secretaria; que el 1 de noviembre del año 2000 le notificaron que por sustitución patronal su empleador pasaría a ser la empresa SERVINCLUIDOS LTDA; que estuvo en constante ascenso dentro de la empresa, empezando en el cargo de secretaria, luego tesorera, posteriormente jefe de reserva, después jefe de call center, hasta finalmente ocupar el puesto de jefe de ventas, cargo que desempeñó desde 2007; que el 01 de marzo de 2021 la entidad demandada realiza otro sí al contrato de trabajo adicionando la cláusula decima segunda, donde las partes acuerdan expresamente que los beneficios otorgados por gastos y medios de transporte y cualquier otro beneficio en dinero o especie que por mera libertad la empresa le otorgue al trabajador, no constituirían factor salarial y en consecuencia acuerdan que el empleador proporcionaría de mera libertad al empleado un auxilio mensual para gastos de movilidad la suma de \$297.705.

Señaló igualmente que el 1 de junio de 2015 se realiza una compensación laboral donde le informan que desde esa fecha tendría un salario ordinario fijo de \$1.300.000, más el pago de comisiones y beneficios extralegales como un auxilio no salarial de alimentación equivalente a \$6.700 diarios por cada día hábil; que durante la vigencia de su contrato nunca se presentaron llamados de atención, ni sanciones disciplinarias; que el 14 de noviembre de 2017 le fue entregada citación para diligencia de descargos, la cual se realizaría al día siguiente a las 8:00 a.m., en dicha citación se le informaron unos hechos sujeto de investigación, inmediatamente sus claves de acceso a los computadores y sistema donde estaban las pruebas para poder argumentar su defensa fueron bloqueados sin darle oportunidad de recaudar pruebas para tal diligencia, vulnerando así su derecho a la defensa y el debido proceso; que al momento en que le fue entregada la citación para diligencia de descargos, no le informaron que las conductas para las cuales fue citada constituyen una falta disciplinaria; que al momento de proferir la decisión tomaron la decisión más severa que fue dar por terminado el contrato, indicando que las omisiones frente a los procedimientos de registro, reserva y facturación establecidos por la compañía constituían una falta gravísima.

También explicó que el reglamento interno no presenta ninguna actualización o modificación, dicho reglamento no contiene de forma expresa ni tacita, que las supuestas conductas objeto de la diligencia de descargo sean catalogadas como faltas graves o gravísimas; que la sociedad demandada no canceló el valor correspondiente a la indemnización por despido sin justa causa; que el último salario que recibió fue de \$1.436.100, a lo que se le debe sumar las comisiones por venta y los auxilios periódicos que se le otorgaban; que desde el inicio del contrato de trabajo recibió comisiones por ventas y auxilios periódicos pero no siempre fueron reconocidas como factor salarial como lo fue antes del 15 de junio de 2015, reconociéndolas en un 70% factor salarial y un 30% no factor salarial del 15 de junio de

2015 a noviembre de 2016 y solo hasta noviembre de 2016 fueron reconocidas en un 100% como factor salarial; y que la entidad demandada desde noviembre 17 de 1995 ha liquidado de forma deficiente las prestaciones sociales por no tener en cuenta las comisiones causadas al igual que las cesantías.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

SERVINCLUIDOS LTDA contestó la demanda oponiéndose a la pretensión de declarar la nulidad respecto del procedimiento previo de dar por terminado el contrato de trabajo, toda vez que se trató de un modo legal para dar por terminado el contrato de trabajo por justa causa; también se opone a la pretensión de reintegrar a la demandante toda vez que no le asiste obligación y advirtió que canceló las prestaciones sociales y demás derechos laborales de la actora con el salario realmente devengado tanto en vigencia de la relación laboral como a la terminación de la misma, por tal razón no hay lugar a indexación ni a reajuste de ninguno de esos conceptos.

Respecto de los hechos de la demanda, manifiesta que ninguno es cierto y aclara que se hizo el pago de las prestaciones sociales y derechos laborales de la actora con el salario realmente devengado y causado tanto en vigencia de la relación laboral hasta su terminación, aclarando que dentro del contrato que existió entre las partes inicialmente se pactó un salario fijo, sin lugar a pagar comisiones de ninguna índole y que la prueba documental aportada por la parte demandante no demuestra que se realizaran pagos de comisiones por ventas.

Como excepciones propone la de prescripción, inexistencia de las obligaciones a cargo de la entidad demandada, cobro de lo no debido y buena fe.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 16 de febrero de 2022, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín tomó las siguientes decisiones:

*PRIMERO: DECLARAR que la terminación del contrato de trabajo de la señora CARMEN ROCÍO RUÍZ QUINTERO por parte de la sociedad SERVINCLUIDOS LTDA., fue justa y legal.*

*SEGUNDO: DECLARAR que le asiste derecho a la señora CARMEN ROCÍO RUÍZ QUINTERO a que se le reajuste las prestaciones sociales y aportes a la seguridad social en pensiones, al igual que las vacaciones, teniendo en cuenta el salario básico más las comisiones pagadas.*

*TERCERO: CONDENAR a la empresa SERVINCLUIDOS LTDA. a pagar a la señora CARMEN ROCÍO RUÍZ QUINTERO, identificada con la Cedula de Ciudadanía 43.531.074 el reajuste a las prestaciones sociales correspondientes a:*

*Prima de servicios \$2.257.784  
Vacaciones \$3.318.285  
Cesantías \$ 205.036  
Intereses a las cesantías \$ 19.662  
TOTAL \$5.800.767*

*CUARTO: CONDENAR a la empresa SERVINCLUIDOS LTDA. para que realice los ajustes de los aportes en pensiones por los periodos comprendidos entre abril de 2013 y diciembre de 2014, advirtiéndole que se le concede un término de 30 días, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia para que proceda a solicitar a la ACP COLPENSIONES, para que realice el cálculo actuarial de la diferencia presentada en el pago de las cotizaciones a la seguridad social en pensiones por los períodos indicados en la parte motiva y una vez se realice dicho cálculo, se ordena que dentro de los 15 días siguientes se efectúe el respectivo pago.*

*QUINTO: CONDENAR en costas a la sociedad demandada SERVINCLUIDOS LTDA., se fijan agencias en derecho en la suma de \$1.000.000.*

*SEXTO: ABSOLVER a la sociedad SERVINCLUIDOS LTDA. de las demás pretensiones impetradas en su contra por la señora CARMEN ROCÍO RUÍZ QUINTERO.*

*SÉPTIMO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de PRESCRIPCIÓN propuesta por la parte demandada."*

### **DEL RECURSO DE APELACIÓN:**

Inconforme con la decisión, el apoderado de la demandante presentó recurso de apelación en el sentido que el despacho omitió hacer manifestaciones sobre las sanciones moratorias solicitadas con relación a dichas prestaciones sociales. La sanción del artículo 65 del C.S.T. y de del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, las cuales fueron solicitadas en la demanda y se encuentra plenamente demostrado que existió una omisión por parte del empleador del pago completo de sus prestaciones sociales lo que acarrea una sanción, situación que fue reconocida por el representante legal y los testimonios que se presentaron en la demanda.

SERVINCLUIDOS igualmente presenta recurso de apelación y aduce que se le condenó al pago del reajuste de seguridad social entre el periodo de abril de 2013 a diciembre de 2014 pero considera que no hay razón para ello cuando nunca se pactó ningún concepto como salarial antes de junio de 2015, la demandante desde el inicio de la relación laboral tuvo un salario fijo, posteriormente en virtud de la suscripción de una cláusula adicional al contrato de trabajo las partes acordaron que a partir del 01 de junio de 2015 el esquema salarial cambiaría, empezaría a recibir un salario fijo más una suma variable por concepto de comisiones, las cuales fueron constitutivas de salario y SERVINCLUIDOS las tuvo en cuenta para realizar el pago frente a todas las prestaciones sociales; frente a reajuste impuesto de las prestaciones sociales no había lugar a dicha condena teniendo en cuenta que la demandante desde 1996 hasta el 01 de junio de 2015 recibió un salario fijo y no una suma variable.

En cuanto a la manifestación de la parte demandante respecto a las sanciones del artículo 65 y 99 de la Ley 50 de 1990, SERVINCLUIDOS

siempre actuó de buena fe, por lo que considera que no hay lugar a que se tenga en cuenta, toda vez que desde que las partes acordaron que el salario estaría compuesto con una comisión, se realizaron los aportes conforme al salario devengado.

Solicita se revoquen las condenas impuestas en relación con los reajustes que ordenó efectuar frente a las prestaciones sociales, así como el reajuste ordenado y solicitar el cálculo actuarial ante la entidad del fondo de pensiones. Tampoco hay lugar a condena en costas en tanto no tiene porqué efectuar reajuste alguno.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

En el término del traslado para alegar concedido a las partes, la demandada hizo uso de su oportunidad para advertir que quedó suficientemente probado que la demandante incurrió en faltas graves, ya que, para buscar un provecho propio, violó los procedimientos, reglas e instrucciones frente al registro, manejo de reservas y facturación establecidas por la compañía, las cuales eran conocidas a cabalidad como lo confesó en diligencia de descargos. Agrega que la remuneración pactada desde el inicio del contrato entre las partes fue de un salario fijo tal y como lo explicó el representante legal y en ninguna parte, ni en el contrato de trabajo se pactó el pago de "comisión", como erradamente fue interpretado por el *a quo*, habiendo condenado al pago de una diferencia que no se causó a favor de la demandante. Respecto de las comisiones, las mismas fueron acordadas desde el mes de julio de 2015, de esa forma fueron tenidas en cuenta en la base para liquidar prestaciones sociales y los demás derechos laborales y los aportes a seguridad social tal y como se demostró dentro del expediente con las pruebas documentales y el interrogatorio de parte absuelto por la demandante y representante legal. Por último, advierte que, SERVINCLUIDOS LTDA siempre actuó con total y absoluta buena fe, por cuanto pagó lo que creyó deber al momento de liquidar las cesantías, salarios y prestaciones sociales.

Solicita al despacho se sirva revocar únicamente las condenas consistentes en el pago de reajustes y que corresponden al pago de diferencias salariales de prestaciones sociales y aportes que de manera errónea fueron ordenadas, así como las costas judiciales y en lo que se refiere a la declaratoria de terminación de contrato por justa causa de la ley 50 de 1990 se confirme, pues no puede predicarse una mala fe por parte de la entidad.

### **CONSIDERACIONES:**

La necesidad de sustentar el recurso de apelación como medio de impugnación de las providencias judiciales, guarda íntima conexidad con el principio de la consonancia a que se refiere el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, en tanto ordena al *ad quem* ceñir su estudio en segunda instancia sólo a las materias específicas objeto de censura.

Tiene dicho la jurisprudencia laboral que las reglas que gobiernan tal recurso son precisas en circunscribir la competencia funcional del superior a las materias respecto de las cuales el apelante haya manifestado inconformidad y cumplido con la carga procesal de fundamentar sus reparos. (V. gr., pueden verse sentencias de julio 07 de 2009, radicación 32960; SL2764-2017 o SL2010-2019)

Lo anterior para concluir, en primer lugar, que, en este caso concreto, pretensiones tales como la principal de reintegro por presunta violación al debido proceso laboral, o la subsidiaria de indemnización por despido injusto, no podrán ser materia de análisis en esta instancia, pues no fueron atacadas en el recurso.

En este orden, los temas a dilucidar, con apego al sentido de las apelaciones de las partes y en orden metodológico, son: (i) la procedencia de los reajustes ordenados por la jueza, tanto de prestaciones sociales, como de vacaciones y de los aportes al sistema



general de pensiones; (i) de mantenerse la decisión, se resolverá lo concerniente a las indemnizaciones moratorias, esto es, la contemplada en el artículo 65 del CST, así como la del artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990, para lo cual deberá adicionarse la sentencia en el sentido que fuere, dado que la a quo no tocó el punto.

(i) De los reajustes.

La funcionaria de primer grado dispuso el reajuste de los aportes al sistema general de pensiones entre los meses de abril de 2013 y diciembre de 2014, así como el de las prestaciones sociales legales y de las vacaciones, tras computar el promedio salarial incluyendo las comisiones durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2015 (por efectos de la prescripción) y el 17 de noviembre de 2017 (fecha de terminación del vínculo). En contraste, la sociedad opositora argumenta que fue solo a partir del 1º de junio de 2015 que las partes establecieron la modalidad de salario conformado por un factor fijo más comisiones, no antes, cuando solo se pagaba un salario básico.

En principio, no le asiste razón a la apoderada de la demandada en su argumento, pues, con base en la tesis de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de la relación laboral, si antes del 16 de junio de 2015 las partes no habían acogido expresamente el esquema de un salario compuesto por un básico más unas comisiones, no significa que los pagos retributivos del servicio efectuados antes de esa fecha, no tengan naturaleza salarial solo porque faltaba la expresión de un acuerdo.

En efecto, antes de esa data, la demandante – quien, dicho sea de paso, desempeñaba el cargo de Jefe Puntos de Ventas – igualmente recibía una remuneración adicional al salario fijo, que dependía directamente de su desempeño y que en las colillas de pago aparecían denominadas como “*incentivos*”, cuando en realidad correspondían a

una retribución directa el servicio prestado. El representante legal – Sr. WALTER FORERO JIMÉNEZ - al absolver interrogatorio de parte, indicó que en ese entonces la empresa reconocía *unos premios que no eran salario*, pero que se pagaban por consecución de metas, entendiéndose así que ciertamente retribuían el esfuerzo personal de la trabajadora. Ergo, con carácter salarial.

En sentido similar, la testigo LINA MARCELA BERMÚDEZ PULGARÍN manifestó que desde que ella misma ingresó en el año 2008, siempre tuvieron comisiones, incluyendo a la demandante y que *...después las legalizaron.*; o LEIDY VANESSA ALZATE QUIRÓZ, también ex empleada de la Compañía, quien afirmó que antes de junio de 2015 no les reconocían comisiones con carácter salarial, que solo después tuvieron esa condición por cumplir presupuestos de ventas, pues antes les decían que era un incentivo.

No obstante, aunque el concepto siempre tuvo naturaleza salarial, la condena por reajuste de prestaciones sociales y vacaciones, será revocada, por lo siguiente:

- i) La jueza declaró la prescripción de los derechos que antes del 16 de marzo de 2015, eran exigibles. Esta decisión en concreto, no fue impugnada;
- ii) Se sabe que las partes suscribieron un acuerdo el día 1º de junio de ese mismo año (75 días después) mediante el cual precisaron que el salario se conformaba por un valor fijo más uno variable constituido precisamente por las comisiones de marras, mismas que se empezaron a reconocer bajo esa denominación desde la primera quincena del mes de junio de 2015, incluyéndolas, a partir de allí, como factor salarial para efectos de liquidación prestacional. Esto último se observa, por ej., en las páginas **173** (Prima de servicios de dic./16, cuando el salario fijo era de \$718.050/quincenal y el pago de

la prima ascendió a \$1.707.217); **175** (Intereses a la cesantía de enero/17, mismo salario fijo, y el pago ascendió a \$442.155); **185** (Prima de servicios de jun/17, mismo salario fijo, y el pago fue de \$1,831.883); **186** (vacaciones a jun/17, el pago ascendió a \$2.671.790); **195** (contentivo de la liquidación definitiva, en la cual se reflejan los diversos pagos calculados sobre promedios que incluían fijo y comisiones). Entre otros. (Archivo #3);

iii) Lo anterior significaría que solo habría lugar al reajuste generado entre el 16 de marzo de 2015 (por prescripción) y el 1º de junio de ese año;

iv) Pero, al revisar las colillas de pago aportadas el plenario, no se encuentran los reportes de nómina correspondientes a ese lapso, de 2 meses y 15 días, por lo cual no existen bases para disponer el reajuste pretendido. En el fallo que se revisa, no encuentra la Sala con claridad, la fuente de las cuentas que el despacho de primer grado hizo para calcular los presuntos reajustes de cesantía, sus intereses, primas de servicios y vacaciones. Rubros esto que recalculó por el periodo corrido entre el 16 de marzo de 2015 y el 17 de noviembre de 2017, cuando según lo visto, la empresa los liquidó con el promedio de las comisiones, sin que se pruebe un saldo faltante.

v) Dicho esto, la sentencia será revocada en cuanto dispuso tales reajustes para en su lugar absolver a la sociedad accionada.

Cosa diferente ocurre con los ajustes a los aportes en pensiones al sistema. Esto por cuanto durante el periodo que se impartió tal orden, esto es, se reitera, entre enero de 2013 y diciembre de 2014, se observa que las cotizaciones referidas se hicieron sobre el salario fijo que en ese momento era de \$1.292.000 o \$1.339.000, cuando la accionante recibió otras sumas a título de incentivos que, como ya se

concluyó, debían recibir trato salarial. (Pág. 132, archivo #3) Como sea que en el recurso se atacó el concepto, más no las cuentas hechas por la a quo, se mantendrá la orden en las cantidades dadas.

ii) De las sanciones por mora (apelación de la demandante)

Al respecto cabe aclarar que, en el caso presente, una hipotética indemnización moratoria se generaría solo por el pago incompleto de los aportes en pensiones durante el periodo ya definido, no así por falta de pago de salarios y/o prestaciones sociales, o bien, en el caso del artículo 99-3 de la Ley 50/90, por consignación insuficiente de las cesantías anuales en el Fondo respectivo.

Así las cosas, para la Sala no es atendible la prosperidad de la mora en mención, por razones tales como que, para realizar los aportes en cuestión, la empresa se valió de algunos acuerdos previos sobre desalarización de ciertos conceptos, tales como \*gastos y medios de transporte, \*suministro y/o subsidio de alimentación, \*suministro y/o subsidio de alojamiento, \*suministro y/o subsidio de vestuario, \*auxilio de obsequios, \*bonificaciones e incentivo, etc. (Acuerdo firmado el 1º de marzo de 2012, pág. 23 archivo #2). Si bien es cierto, mediante las presentes decisiones judiciales se les otorgó a los incentivos – específicamente - naturaleza salarial, aplicando para ello el principio de la primacía de la realidad y las enseñanzas de la jurisprudencia laboral elaborada a través del tiempo, para esta Sala, el entendimiento que la empresa le daba a tales acuerdos estuvo desprovisto de una intención dañosa, o movida por la mala fe en sus relaciones con los trabajadores. Y no se presentó por parte de la demandada una postura jurídica obstinada, al punto que, posteriormente, por el contrario, enmendó el error jurídico para reconocerle connotación salarial a dichos conceptos.

En casos con ribetes similares, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (sentencia SL1139-2018, Sala de Descongestión) razonó así:

*“En efecto, se debe recordar que, acorde con la jurisprudencia, la buena fe equivale a obrar con lealtad, rectitud y de manera honesta, es decir, se traduce en la conciencia sincera, con sentimiento suficiente de probidad y honradez del empleador frente a su trabajador, que en ningún momento ha querido atropellar sus derechos, lo cual está en contraposición con el obrar de mala fe, al pretender obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de integridad o pulcritud.*

*Siendo ello así, la Sala debe concluir que la entidad demandada no actuó desprovista de buena fe y lealtad, al no haber cancelado los aportes a salud por los años 1998 y 1999, así como a pensión entre 1998 y el año 2002, pues si bien no logró demostrar el pago de dichos periodos que condujo a que se ordenara su cancelación, lo cierto es que, en el expediente obran las solicitudes de afiliación al sistema de seguridad social dentro del primer año de servicios (f.º105 y 107), sin que la razón para dejar de cumplir de manera efectiva con tal obligación en esos primeros ciclos, sea la de obtener la accionada una ventaja o beneficio propio o causarle un perjuicio al trabajador, por ende no se evidencia la intención caprichosa de no responder por tales pagos.*

*Tampoco resultaría viable calificar como desleal el actuar de la entidad llamada a juicio, si se tiene en cuenta que el tiempo durante el cual se omitió realizar los citados aportes, corresponde apenas al comienzo de la relación contractual, pues durante los últimos ocho años, el deber del empleador para con el sistema fue cumplido a cabalidad, tanto en salud como en pensión, y lógicamente comprende el de los últimos tres meses de la relación laboral a la que alude la norma en comento, de tal modo que su actuar lo fue de buena fe, sin que con ello se excuse el incumplimiento por esos primeros periodos, pues lo que se trata es de ponderar y analizar si el actuar del empleador a la finalización del contrato de trabajo estuvo inequívocamente dirigido a querer perjudicar al trabajador, lo cual en el presente caso no aconteció.”*

Pero, además, sería factible declarar que tal moratoria está prescrita, lo que no implica desconocer que el reajuste de los aportes como tal si es imprescriptible. Es que una cosa es la posibilidad de reclamar el pago de los aportes o el reajuste de los mismos en cualquier tempo,

pues ellos constituyen un pilar fundamental para la construcción y consolidación de la pensión, reconocido constitucionalmente como derecho fundamental (art, 48 de la Carta Política), y otra muy distinta es la sanción que afecta al empleador, consistente en un día de salario por cada día de retardo en el pago completo de los aportes, que fue lo acontecido en este caso. Son dos rubros distintos con alcances y concepciones diferentes, que, por la misma razón, pueden recibir un trato diferenciado. De ahí que, a juicio de la Sala, la moratoria por pago insuficiente de los aportes al Sistema General de Pensiones, empezaría a prescribir a partir de la configuración de la deuda, que es cuando se hace exigible, por lo cual, en este caso, el derecho se encuentra prescrito.

Dado que la jueza de primera instancia omitió referirse a este extremo de las pretensiones, cuyo pronunciamiento se reclama en el recurso, se ADICIONARÁ la sentencia en el sentido de ABSOLVER a la accionada de las indemnizaciones moratorias tanto del artículo 99-3 de la Ley 50/90, como de la sanción por falta de pago de que trata el artículo 65 del CST, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002.

Sin costas en esta instancia, por cuanto el recurso fue resuelto de manera desfavorable para ambas partes.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

### **RESUELVE:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Medellín el día 16 de febrero de 2022, en cuanto **CONDENÓ** a SERVINCLUIDOS LTDA a realizar los ajustes de los aportes en pensiones correspondientes a la Sra. CARMEN ROCÍO RUÍZ

QUINTERO por los periodos comprendidos entre abril de 2013 y diciembre de 2014; la **REVOCA** en cuanto CONDENÓ a la a empresa a pagarle a la demandante el reajuste a las prestaciones sociales y vacaciones, para en su lugar ABSOLVER de esta pretensión; y la **ADICIONA** en el sentido de ABSOLVER a la demandada de las indemnizaciones moratorias tanto del artículo 99-3 de la Ley 50/90, como de la sanción por falta de pago de que trata el artículo 65 del CST, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ffbe198a0f4f851f4bec1df9e151c5eaddf0eda18b1a1f333231f5c2de15d60f**

Documento generado en 26/01/2023 01:13:05 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>